

MARCELO CAVAROZZI

AUTORITARISMO
Y DEMOCRACIA
(1955-1996)

*La transición del Estado
al mercado en la Argentina*

FOTOCOPIADORA
C.E.P. y C.S.
CARP N° 29 SIF: 1
Folio N° 8 DIF: 7

(Prácticas)

Ariel

I
EL FRACASO DE LA "SEMIDEMOCRACIA"
Y SUS LEGADOS

En 1955 una insurrección civil-militar puso fin al gobierno peronista. La insurrección no sólo produjo el derrocamiento de Perón: asimismo tuvo éxito en dismantelar el modelo político prevaleciente durante los diez años anteriores. El modelo peronista, basado en la relación directa entre líder y masas, había hecho de Perón el depositario único de la representación del pueblo. Este fenómeno tuvo como efecto que los canales parlamentarios y partidarios fueran permanentemente relegados y perdieran relevancia en la escena política. Además, el peronismo en el poder tendió a considerar las actividades de los partidos de oposición (y de las organizaciones profesionales y sindicales no peronistas) como manifestaciones de intereses sectoriales ilegítimos. Consecuentemente, el gobierno obstaculizó en forma creciente tales actividades, tanto dentro como fuera del Parlamento.

Los líderes del golpe de Estado de 1955 caracterizaron al régimen peronista como una dictadura totalitaria y, en consecuencia, levantaron los estándares de la democracia y la libertad, proponiéndose como objetivo el restablecimiento del régimen parlamentario y el sistema de partidos. Este objetivo, sin embargo, se frustró recurrentemente: en 1957, la asamblea constituyente, controlada por los parti-

dos no-peronistas, no pudo acordar una nueva constitución y se disolvió sin lograr una reforma del anticuado texto del siglo pasado; en 1962, los militares —con el apoyo de varios partidos— derrocaron al presidente Frondizi, elegido constitucionalmente cuatro años antes; en 1966, los militares volvieron a intervenir para derrocar a otro gobierno constitucional, esta vez el del presidente Illia.

Tanto en 1955-1958 como en 1962-1963, los interregnos entre gobiernos constitucionales fueron ocupados por administraciones militares. Las mismas, sin embargo, no se propusieron reemplazar la democracia parlamentaria por un régimen político alternativo ni posponerla para un futuro distante, al que se arribaría sólo después de que ciertos cambios económicos o sociales fueran logrados. Más bien, el principal y autoproclamado objetivo de estos gobiernos temporarios fue la imposición de mecanismos proscriptivos del peronismo, mientras, al mismo tiempo, intentaban erradicarlo. El peronismo era percibido como un fenómeno inherente e irremediablemente adverso a las instituciones y valores democráticos; a los cuales, de haberle sido permitido actuar libremente, hubiera deformado e incluso destruido.

El despiégue de una nueva fórmula política, después de 1955, fue en verdad un proceso convulsivo y frustrante. Pero los fracasos en la tarea de lograr estabilidad institucional no impidieron que durante esos años se configuraran nuevos modos de hacer política que implicaron una profunda redefinición de los patrones de procesamiento de los conflictos y relaciones socioeconómicas. Estos nuevos modos de articulación política se desplegaron gradualmente durante la década siguiente a la caída de Perón; si bien no dieron lugar al surgimiento de una fórmula institucional que produjera estabilidad política, su relevancia trascendió al período 1955-1966. En efecto, los nuevos modos dejaron un legado político-ideológico con el cual tuvieron que lidiar necesariamente los diferentes actores políticos, viejos y

nuevos, cada vez que se esbozaron fórmulas políticas alternativas a partir de 1966.

Los puntos de esta sección analizan la forma en que se fueron definiendo estos modos de hacer política. Para ello se exploran tres de sus elementos más importantes: a) el surgimiento de desfasajes significativos entre el nivel de los intereses socioeconómicos, por un lado, y el de los bloques políticos, por el otro; b) la formación de un movimiento sindical peronista con características nuevas, que se constituyó en un actor político autónomo y articuló progresivamente una estrategia defensiva y de oposición; c) el ingreso de los militares a la arena política, asumiendo, primero, un rol tutelar en el marco de regímenes semidemocráticos, y expandiendo, más tarde, su esfera de intervención con el objetivo de acabar con las prácticas democráticas y las instituciones parlamentarias.

ARGENTINA POS 1955: UNA COMUNIDAD POLÍTICA DESARTICULADA

El derrocamiento del gobierno peronista en 1955 fue promovido por un amplio frente político que incluyó a todos los partidos no peronistas, los representantes corporativos e ideológicos de las clases medias y las burguesías urbana y rural, las fuerzas armadas y la Iglesia. Los miembros del frente antiperonista persiguieron objetivos dispares. Sin embargo, el frente pudo mantenerse unido durante un cierto tiempo bajo la bandera de la "democracia", que fue levantada oponiéndola al carácter "dictatorial y totalitario" atribuido al régimen peronista.

Muchos antiperonistas compartieron la noción, un tanto ingenua, de que los peronistas habían sido convertidos a ese credo político mediante una combinación de demagogia, engaño y coerción. En consecuencia, creyeron que la mera denuncia de los "crímenes de la dictadura", acompañada de un proceso de reeducación colectiva, resultaría en

una gradual reabsorción de ex peronistas por partidos y sindicatos "democráticos". Esta ilusión no duró mucho; el peronismo sobrevivió a la caída de su gobierno y se constituyó en el eje de un vigoroso movimiento opositor. Sin embargo, en el corto plazo, dicha ilusión tuvo el efecto de permitir a los antiperonistas proclamar que la proscripción del peronismo —una medida que implicaba segregar políticamente entre un tercio y la mitad de la ciudadanía argentina— era en realidad una acción democrática. Naturalmente, una consecuencia adicional de la proscripción del peronismo fue su exclusión del gobierno.

El corolario de la exclusión del peronismo, tanto del plano electoral como del correspondiente a la acción política legal, fue particularmente complejo. En primer lugar, introdujo una profunda disyunción entre la sociedad y el funcionamiento de la política en la Argentina, que resultó en la emergencia paulatina de un sistema político dual. En el mismo, los mecanismos parlamentarios coexistieron, de manera conflictiva y a veces antagónica, con modalidades extrainstitucionales de hacer política. El principal resultado de este dualismo fue que los dos "bloques" principales de la sociedad —es decir, el sector popular y el frente antiperonista, compuesto por los sectores burgueses y de clase media— rara vez compartieron la misma arena política para la resolución de conflictos y el logro de acuerdos basados en mutuas concesiones. El sector popular, y especialmente la clase obrera, que se había expresado principalmente a través del peronismo, quedó privado de toda representación tanto en las instituciones parlamentarias semidemocráticas como en la maquinaria institucional del Estado. En contraste, sus adversarios sociales —quienes, por otra parte, habían sufrido una exclusión política parcial durante la época peronista— tuvieron la posibilidad de recurrir tanto a los mecanismos parlamentarios como a los extrainstitucionales. Gozaron de un acceso privilegiado al Es-

tado y ejercieron una influencia decisiva sobre las políticas y los impactos de las acciones estatales.

Las presiones ejercidas por el sector popular fueron, en su gran mayoría, de carácter extrainstitucional. El movimiento sindical peronista se transformó progresivamente en la expresión organizada más poderosa de aquel sector. En última instancia, sin embargo, la presión popular se redujo a la capacidad de desestabilizar, desde afuera del escenario político oficial, a cada uno de los regímenes civiles y militares que se sucedieron durante el período. Tal desestabilización se logró tanto a través del plantec de demandas económicas que contradijeron y socavaron la viabilidad de las políticas de estabilización lanzadas entre 1956 y 1963 como mediante el apoyo a candidatos antioficialistas en elecciones nacionales, provinciales y locales.

A la limitada correspondencia que existió entre, por un lado, los conflictos y los alineamientos sociales y, por el otro, las modalidades institucionales de hacer política, fenómeno al que hemos caracterizado como de "disyunción", se agregó un segundo factor que la acentuó. Este podría ser considerado como una "disyunción dentro de la disyunción" y afectó al antiperonismo. Originalmente, el bloque social que enfrentó a los sectores populares se expresó plenamente a través del frente formado por los partidos no peronistas y los militares "democráticos" triunfantes en 1955. Poco a poco, sin embargo, esta situación se fue alterando y partidos no peronistas y militares comenzaron a expresar contenidos disímiles, y a veces antagónicos. Esto se debió a dos razones. La primera fue que los militares "democráticos" de 1955 fueron perdiendo progresivamente su "vocación democrática", para concluir respaldando el establecimiento de regímenes de carácter autoritario. Este "deslizamiento" autoritario de los militares los llevó a enfrentarse crecientemente con los partidos, pues a pesar de que éstos por lo general no renegaron de su antiperonismo su razón

de ser estaba obviamente ligada al funcionamiento de un sistema democrático-parlamentario y al mantenimiento de un mínimo de libertades públicas. La segunda causa que complicó las relaciones entre militares y políticos fue que los partidos no-peronistas se transformaron en el principal canal de expresión de una compleja interacción entre dos controversias que dominaron la escena política argentina luego de la caída de Perón. En 1955 el frente antiperonista se había coaligado en torno al estandarte "oposicionista", es decir, el proyecto de destrucción del régimen peronista. Esta unidad, sin embargo, comenzó a desvanecerse cuando llegó el momento de ejercer el poder desde el Estado y hallar vías de resolución a las aludidas controversias.

La primera de estas controversias se definió en torno al rol del gobierno con respecto a la erradicación del peronismo. Las diferentes posiciones en ese sentido comprendieron un espectro que iba desde el "integracionismo" —el cual postulaba una gradual reabsorción del peronismo a la vida política, aunque sin desconocer la necesidad de una purga de sus aspectos más "dañinos", como el mismo Perón— hasta el "gorilismo", con su nunca abandonado propósito de "extirpar completamente el cáncer peronista" de la sociedad argentina. La segunda controversia estuvo vinculada al modelo socioeconómico que, presumiblemente, reemplazaría al que había prevalecido durante el período 1945-1955. En 1955 el victorioso frente antiperonista se unificó en torno a la denuncia de los problemas económicos que la Argentina había enfrentado desde fines de la década de 1940; inicialmente, resultó relativamente fácil para los distintos integrantes del frente coincidir en la condena de un conjunto de políticas poco efectivas y de una administración corrupta, como principales fuentes de las dificultades que enfrentaba el país. Sin embargo, esta transitoria unidad pronto se hizo trizas al aflorar diagnósticos opuestos de la crisis económica argentina. El perfilamiento de

estos diagnósticos se tradujo en la formulación de recomendaciones alternativas acerca del curso a seguir en materia de política económica.

A partir de 1956 fueron emergiendo gradualmente tres posiciones divergentes en el campo del antiperonismo: la del populismo reformista, la desarrollista y la liberal. La primera no cuestionó las premisas básicas del modelo impulsado durante la década peronista.³ Por el contrario alentó la posibilidad —y conveniencia— de promover simultáneamente los intereses de la clase obrera y la burguesía urbana, y propuso una política nacionalista moderada, que impidiera, o al menos limitara, la presencia del capital extranjero en sectores tales como energía, comunicaciones, y la producción de bienes de capital. Esta posición combinaba elementos reformistas y populistas y, en realidad, sólo formuló dos críticas importantes a las políticas económicas del gobierno peronista. Por una parte, el *populismo reformista* sostuvo que las políticas de Perón habían desalentado la producción agropecuaria, acusación que quedaba corroborada por el estancamiento de la producción en esa área a lo largo del gobierno peronista. Por otra parte, esta posición argumentó que se había fracasado en la promoción de la industria pesada y el desarrollo de la infraestructura económica, y que el Estado había expandido desproporcionadamente sus gastos corrientes, retrasando la inversión en obras públicas.⁴

Las consignas del populismo reformista fueron promovidas por el radicalismo, que se había transformado en la única oposición partidaria organizada después de 1946.⁵ En 1956 el partido se dividió; un ala, la Radical Intransigente o frondizista, era partidaria de una gradual legalización del peronismo; la otra, los Radicales del Pueblo, permanecieron cercanos a la posición proscriptiva, más dura, de los militares. En todo caso, las facciones mayoritarias de los dos nuevos partidos mantuvieron su adhesión al pro-

grama de Avellaneda, que proponía en lo económico una serie de medidas de carácter nacionalista y reformista.

Sin embargo, cuando el líder de los Intransigentes, Arturo Frondizi, fue elegido presidente en 1958, redefinió radicalmente la orientación económica del partido, articulando una posición enteramente distinta, la *desarrollista*, y fue la otra fracción, es decir los Radicales del Pueblo, quienes mantuvieron su apoyo a los postulados del populismo reformista.

Los desarrollistas, en cambio, sostuvieron que el estancamiento económico de la Argentina se debía principalmente a un retardo en el crecimiento de las industrias de base. Tal debilidad, según esta postura, sólo podía superarse mediante un proceso de "profundización" que abarcara la expansión de los sectores productores de bienes de capital e intermedios, y de la infraestructura económica. Asimismo, la posición desarrollista postuló que el modelo de conciliación de clases del período 1945-1955 tenía, al menos en el corto plazo, una contradicción ineludible. La misma sólo podía ser resuelta disminuyendo el salario real de los trabajadores para aumentar la renta de los industriales; tal aumento era, a su vez, considerado un requisito indispensable para una elevación significativa del nivel de inversión. Finalmente, los desarrollistas abogaron por un cambio sustancial en las políticas relacionadas con el capital extranjero, aplicadas en el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollismo sostuvo que, dado que los recursos locales de capital eran insuficientes para lograr la deseada "profundización", se requería una incorporación masiva de capital extranjero a la economía. El desarrollismo recién se terminó de articular en 1958, cuando Frondizi cambió de curso y tiró por la borda el programa "nacional y popular" que había contribuido significativamente a generar los apoyos sociales que le permitieron alcanzar la victoria en las elecciones de ese año.⁶

Como hemos visto, el desarrollismo no prestó un apoyo irrestricto al modelo de conciliación de clases, sino que propugnó la introducción de significativos ajustes del mismo. Tales modificaciones tuvieron por objeto inducir un cambio en la correlación de fuerzas en favor de la burguesía urbana. A pesar de ello, el programa desarrollista no cuestionó los aspectos centrales del proceso de industrialización sustitutiva inaugurado en los años treinta. Por el contrario, los políticos desarrollistas impulsaron tanto la aceleración como la ampliación cualitativa del proceso de industrialización.

Comparativamente, la última de las posiciones, la *liberal*, fue mucho más lejos en la crítica del proceso de industrialización iniciado en la década de 1930 y de las prácticas sociales y políticas asociadas al mismo. Los liberales no sólo criticaron el modelo de conciliación de clases; cuestionaron también la premisa según la cual el desarrollo industrial debía constituir el núcleo dinámico de una economía cerrada. Argumentaron en este sentido, que desde los años treinta —y particularmente desde 1946— la Argentina se había enfrentado con dos problemas críticos; el progresivo deterioro de la disciplina de los trabajadores y la ineficacia de amplias franjas de la burguesía industrial. Tales problemas tenían su raíz, desde la perspectiva liberal, en las políticas que habían cerrado la economía, favoreciendo la proliferación de industrias "artificiales", y en el excesivo crecimiento del Estado. La imagen del mercado pasó a constituir, en un doble sentido, la piedra fundamental de la posición liberal. Por una parte, implicaba la apertura de la economía argentina y su reintegración al mercado internacional, mediante la reducción de los aranceles y la eliminación de otras "distorsiones" que protegían a los sectores artificiales. Por otra parte, suponía una drástica reducción de la intervención del Estado en la economía y la restauración, mediante adecuados incentivos, de la iniciativa del sector privado.

Como fuera ya señalado, cada una de estas tres posiciones abogaba por políticas económicas disímiles y, con frecuencia, antagónicas. Obviamente, tales políticas tenían la capacidad potencial de afectar de manera diferente los intereses de las principales clases de la sociedad argentina. Sin embargo, la política de ese período se caracterizó por una circunstancia muy poco común: los clivajes y alineamientos políticos no respondieron solamente a los cálculos que se hicieron del impacto que las políticas económicas producirían en cada clase social. Existió, además, otro factor que estuvo vinculado sólo en forma indirecta, cuando no contradictoria, a las respectivas evaluaciones de los intereses económicos particulares; ese factor no fue otro que la cuestión del peronismo. La presencia del proscrito movimiento peronista se expresó de un modo muy especial en la escena política. Dicha presencia, si bien implícita, fue uno de los factores determinantes de los modos en que las organizaciones políticas y sociales que encarnaron las tres posiciones descriptas más arriba definieron y resolvieron los conflictos surgidos durante este período.

A partir de 1955, los partidos políticos, organizaciones corporativas y corrientes ideológicas, a través de los cuales se expresaron el reformismo populista, el desarrollismo y el liberalismo, entraron en numerosas alianzas y conflictos. Como se adelantaba arriba, tanto los apoyos que tales partidos y organizaciones recibieron, como las oposiciones que suscitaron, tuvieron que ver con dos factores: 1) las predicciones de las consecuencias que previsiblemente tendría la implementación de las políticas económicas alternativas en relación con los intereses económicos de cada clase o sector social, y 2) el modo en que la retórica, las plataformas y la ideología de cada partido o corriente aludieron a la cuestión del peronismo. Tales alusiones, a su vez, hacían referencia a las dos principales manifestaciones político-institucionales de la identidad peronista de los secto-

res populares, la exclusión política que sufrían como ciudadanos, y su renovada adhesión a un movimiento sindical que continuó definiéndose como parte del peronismo y no meramente como una red de organizaciones corporativas de la clase obrera.⁷

La complejidad de la política argentina del período 1955-1966 se debió en gran medida a que las adhesiones y oposiciones políticas generadas, por una parte, por las predicciones acerca de los efectos que tendría la aplicación de las políticas económicas alternativas sobre lo que cada grupo percibía como "sus" intereses, y, por otra parte, las reacciones de los distintos grupos con respecto a las estrategias alternativas de exclusión o reincorporación del peronismo a la escena política legal, estaban relacionadas pero no fueron totalmente coextensivas. La lógica de esta compleja interrelación fue gobernada principalmente por las oscilaciones pendulares de aquellos partidos, organizaciones empresarias y sectores militares que expresaron y articularon la posición liberal.

¿A qué se debieron, y de qué modo ocurrieron las oscilaciones pendulares de los liberales? Dichas oscilaciones en parte respondieron a una circunstancia relativamente contingente: los programas concretos de los dos partidos que dieron cuerpo a las posiciones del populismo reformista y el desarrollismo —es decir, los Radicales del Pueblo y los Radicales Intransigentes— combinaron la política y la economía de una manera contradictoria y, desde la perspectiva de los liberales, totalmente insatisfactoria. Ya desde 1956 sectores significativos del Radicalismo del Pueblo habían defendido políticas económicas reformistas y nacionalistas que poco se diferenciaron de las aplicadas durante la primera etapa del régimen peronista.⁸ Sin embargo, con respecto al peronismo, los Radicales del Pueblo tendieron a asumir posiciones cercanas al "gorilismo"; más específicamente, apoyaron la proscripción electoral del peronismo

hasta principios de la década del sesenta y abogaron por el establecimiento de un sistema de afiliación sindical que hubiera tenido como consecuencia la atomización de la organización corporativa de la clase obrera. Esto último, naturalmente, despertó la oposición de la conducción sindical, predominantemente peronista. La fórmula del Radicalismo Intransigente era, prácticamente, el reverso exacto de la posición de sus viejos correligionarios. Luego de la asunción de Frondizi como presidente, en 1958, los Radicales Intransigentes adoptaron un programa económico orientado a la expansión de las industrias productoras de bienes de consumo durable y de capital y la modernización y privatización creciente de los sectores de energía, transportes y comunicaciones. Este programa reservó un papel estratégico al capital extranjero e impuso inicialmente una drástica reducción del salario real. Los Radicales Intransigentes, sin embargo, nunca abandonaron los objetivos "integracionistas" que anunciaron desde 1956. Trataron de reforzar el predominio peronista en el movimiento sindical, pero, al mismo tiempo, indujeron (e incluso forzaron) a los líderes sindicales a actuar "responsablemente", lo cual significaba: a) contener las "excesivas" demandas salariales de las bases y b) distanciarse del liderazgo ejercido por Perón.

Excluido el peronismo, los dos partidos Radicales agotaban el espectro de fuerzas electoralmente significativas de fines de la década del cincuenta y principios de la del sesenta. La posición liberal carecía de la posibilidad de expresarse a través de un partido conservador fuerte, con posibilidades reales de ganar una elección presidencial o, siquiera, de obtener una representación parlamentaria significativa.⁹ La coherencia interna de los programas liberales se equiparaba a su tremenda debilidad electoral. La síntesis programática liberal, es decir, la propuesta de: 1) erradicar definitivamente al peronismo y pulverizar el sin-

dicalismo peronista, 2) producir una drástica reducción del intervencionismo estatal y 3) eliminar los sectores industriales ineficientes, obtuvo la adhesión de amplios sectores de la burguesía argentina. Empero, no sirvió para ganar votos. En consecuencia, luego de 1955, los liberales debieron enfrentar la dura realidad de que la derrota de su principal enemigo, el peronismo, no se tradujo en la resolución de sus problemas políticos. Así se vieron continuamente forzados a elegir entre lo que en última instancia percibieron como dos "males menores": el desarrollismo y el reformismo populista. Sin embargo, la lógica de este juego político llevó a los liberales a modificar repetidamente su evaluación de cuál de esos "males" era realmente el "menor".

Cuando eligieron dar prioridad a sus objetivos económicos, como entre 1959 y 1961, tendieron a aliarse con el desarrollismo. Pero esa alianza no fue fácil ni pudo alcanzar un grado satisfactorio de estabilidad. Si bien liberales y desarrollistas coincidieron en la necesidad de aplicar programas de estabilización basados en fuertes devaluaciones y congelamientos de salarios, no alcanzaron el mismo grado de acuerdo con respecto a la estrategia económica de largo plazo. Por lo tanto, el éxito mismo del programa de estabilización, sobre el que habían coincidido previamente, agudizó y puso más de manifiesto sus conflictos más profundos.¹⁰ Además, y debido a que los desarrollistas nunca abandonaron su postura "integracionista", los liberales frecuentemente se sintieron ofendidos y perjudicados por las actitudes conciliatorias que tuvo el desarrollismo hacia los líderes sindicales peronistas. Las negativas del gobierno frondizista a dismantelar la CGT y las idas y vueltas con respecto a la proscripción del peronismo en los comicios legislativos y provinciales agudizaron la tensión entre liberales y desarrollistas. En consecuencia, aquéllos se inclinaron a menudo por resaltar sus orientaciones antiperonistas —como ocurrió en 1956-1958 y, menos claramente en 1962-

1963—, lo cual los llevó a unirse al populismo reformista. Pero, naturalmente, ésta también era una alternativa poco satisfactoria. Tanto en 1958 como en 1962 los Radicales del Pueblo ofrecieron una plataforma antiperonista y antiintegracionista aparentemente atractiva, pero que constituía la antípoda del liberalismo en términos de política económica. Cada vez que el populismo reformista tuvo oportunidad de aplicar su programa económico —como ocurrió parcialmente en 1956 y de un modo más claro entre 1963 y 1966— los liberales se sintieron profundamente contrariados por políticas que no dejaban de asemejarse a las del peronismo!¹¹

En consecuencia, uno de los rasgos sobresalientes de la disyunción que recorrió al antiperonismo a lo largo de este período fue que cada uno de los resultados sucesivos estuvo determinado por el sentido en que, alternativamente, oscilaron los liberales. Al mismo tiempo, sin embargo, los liberales ejercieron sólo una influencia mínima en el curso seguido por la política y la economía. Si bien inicialmente estuvieron en condiciones de imponer programas de estabilización, fueron más tarde obligados a renunciar a sus objetivos de largo plazo o, aún peor, forzados a abandonar las posiciones conquistadas en el gobierno. De tanto en tanto tuvieron éxito en lograr la proscripción del peronismo, pero fracasaron rotundamente en su objetivo de controlar el régimen semidemocrático que pretendieron fundar.

Los liberales, como cabía esperar, adquirieron una conciencia creciente de la futilidad de sus pendulaciones, en cuanto al logro de sus objetivos de largo plazo, es decir, la erradicación del peronismo (y de su espectro) y la rectificación de la orientación económica estatista y pro industrialista. Hacia mediados de la década de 1960 esta progresiva toma de conciencia fue un factor decisivo que indujo a los liberales a optar por una estrategia abiertamente antidemocrática. Tal estrategia puso énfasis en la necesidad de

eliminar aquellas mediaciones políticas, los partidos y los mecanismos parlamentarios que, supuestamente, habían impedido por más de una década la implementación del programa liberal. Entre 1964 y 1966, a diferencia del período frondizista, el énfasis renovado puesto por los liberales en sus objetivos económicos no desembocó en otra alianza con el ala desarrollista del espectro político. A esa altura los liberales ya estaban convencidos de que para alcanzar sus objetivos económicos y políticos debían romper sus vínculos con el *establishment* partidario no peronista.

LOS SINDICATOS PERONISTAS EN LA OPOSICIÓN

El intento del régimen militar de 1955-1958 de fundar un régimen político basado en los partidos y en el fortalecimiento de los mecanismos parlamentarios fracasó completamente. Sin embargo, el despliegue de tal intento tuvo consecuencias significativas para la sociedad argentina. Más allá de haber causado el colapso del régimen peronista, la intervención militar favoreció, a partir de 1955, el surgimiento de una especie, de una suerte de "parlamentarismo negro". Este estilo de política se fue conformando a raíz de la frustrada implementación de los proyectos pertenecientes a los militares "democráticos" y de la no prevista configuración de nuevos patrones de acción política que fueron prevaleciendo subsecuentemente. Hasta cierto punto, la misma situación se reprodujo en relación con las políticas hacia la clase obrera y las relaciones laborales. El régimen militar fracasó rotundamente en sus intentos de erradicar al peronismo de la clase trabajadora. Asimismo, el régimen no logró imponer su proyecto de crear un sistema de afiliación y representación sindical múltiple, destinado a reemplazar las pautas establecidas por la ley peronista de los años cuarenta. Sin embargo, a pesar de que no cuajaron, estos intentos produjeron cambios importantes en el interior del movimiento obrero a partir de 1955.

En primer lugar, el estilo de control político de la clase obrera establecido durante la época peronista fue radicalmente modificado. Este estilo se había basado en el tutelaje benévolo de la clase obrera por el Estado y en la subordinación ideológica del movimiento sindical a Perón. Más aún, los líderes sindicales peronistas que habían controlado los sindicatos hasta 1955 se vieron, salvo contadas excepciones, efectivamente desplazados de la escena sindical, y nunca recuperaron su anterior influencia. En segundo lugar, el frustrado proyecto de los militares creó las condiciones para el surgimiento de un movimiento sindical peronista enteramente diferente que ganó cierta independencia frente a Perón y fue capaz de desarrollar su propia estrategia política.

Sin embargo, Perón no desapareció de la escena política argentina ni del peronismo luego de 1955. Su rol, eso sí, sufrió cambios significativos. Para empezar, la naturaleza de su vínculo con las masas populares cambió, ya que Perón dejó de tener la posibilidad de satisfacer sus demandas y de apelar periódicamente a ellas en forma directa. Alternativamente, la figura de Perón emergió como el principal símbolo del retorno. La imagen del retorno a un pasado mejor se constituyó en la base más importante del atractivo que el peronismo despertó permanentemente en las masas y, en particular, en la clase obrera. Otro cambio importante fue que Perón perdió, en parte, su poder de controlar a los líderes peronistas. Algunos políticos provinciales, sobre todo de zonas ajenas a las áreas metropolitanas de la región pampeana, y numerosos líderes sindicales, generaron bases propias de poder, lo cual les dio un espacio para desafiar ocasionalmente la autoridad del "líder". Si bien los desafíos más serios y explícitos a la autoridad de Perón fracasaron invariablemente, el poder para sancionar las expresiones de rebeldía, otrora ejercido sin restricciones por el "líder", se vio reducido sustancialmente.

Los desafíos abiertos a la autoridad de Perón no constituyeron la única manifestación de las transformaciones que su liderazgo sufrió a partir de 1955. Otra circunstancia importante fue que las connotaciones ideológicas del peronismo se fueron librando en parte de su influencia. La siempre ambigua ideología peronista empezó a reflejar en mayor medida la correlación de fuerzas internas del movimiento. Un peronismo menos subordinado a la autoridad de Perón, y reflejando más directamente el peso relativo de las fuerzas sociales que lo constituía, se transformó en un peronismo crecientemente proletario. Esta gradual transformación fue favorecida por un factor adicional: en cada ocasión que la proscripción electoral del peronismo fue levantada —aunque fuera de manera parcial— la esfera de acción de los líderes sindicales se vio considerablemente expandida al tener la oportunidad de incidir en la lucha política en torno a los comicios. El voto de los trabajadores se transformó así en un instrumento de presión y negociación, comparable a los paros y huelgas. Además, a diferencia de Perón y los políticos peronistas, los líderes sindicales tuvieron siempre la opción de replegarse a una esfera específica de acción: las negociaciones colectivas y las relaciones industriales. En consecuencia, los líderes sindicales del peronismo desarrollaron una aptitud de la que habían carecido hasta 1955, es decir, la capacidad de negociar con actores políticos no peronistas, tales como los partidos, las asociaciones empresariales y los militares.

El poder del movimiento sindical peronista se amplió después de 1955. Asimismo, este poder se apoyó en bases bastante diferentes. ¿Cómo empleó el sindicalismo su redefinido poder? Más arriba se sugirió que las acciones de los líderes sindicales fueron gobernadas, a partir de 1955, por una estrategia defensiva y de oposición. Esto estuvo estrechamente ligado al énfasis puesto por el peronismo en la imagen del retorno. Los sindicalistas peronistas de la épo-

ca posterior a 1955 actuaron en una sociedad que cada vez se pareció menos a la Argentina del periodo 1945-1955. A partir de 1959 la economía fue gradualmente transformada por la expansión de los sectores industriales productores de bienes intermedios y de consumo durable. Dichos sectores eran más intensivos en el uso del capital y estaban más penetrados por el capital extranjero que los sectores industriales desarrollados durante las dos décadas anteriores. Los nuevos sectores pronto desplazaron a estos últimos de su rol de núcleo dinámico del capitalismo argentino. Sin embargo, el discurso de los sindicalistas peronistas reclamó continuamente la restauración de los atributos prevalentes antes de 1955. Estos atributos eran, en parte, rasgos reales de la Argentina de la década 1945-1955 y, en parte, una destilación de la visión ideológica del peronismo: la alianza entre la burguesía nacional y la clase obrera bajo el tutelaje protector del Estado; políticas económicas redistributivas; nacionalismo; la definición de la oligarquía (agraria) como el principal adversario social de las fuerzas "nacionales y populares" y el poder arbitral de Perón.

El símbolo unificador de la recuperación de la época de oro perdida lo constituía, por supuesto, el retorno de Perón a la Argentina... y al poder. Sin embargo, el retorno de Perón, y de la Argentina peronista, dejó de ser objetivo político fundamental del movimiento sindical peronista. Se transformó, más bien, en una especie de mito que cumplía dos funciones. En primer lugar, permitió a los líderes sindicales interpelar a los obreros como obreros peronistas, y por lo tanto rescatar una de las raíces de su identidad colectiva, que no llegó a ser borrada por los sucesivos regímenes posperonistas.¹² En segundo lugar, la proclamada adhesión a un objetivo político que, en el contexto de la Argentina de 1955-1966, era considerado inalcanzable por todos los sectores políticos importantes —peronistas incluidos— liberó a los sindicalistas de la responsabilidad de re-

conocer las consecuencias y corolarios políticos más concretos que tenía su estrategia. Dicho reconocimiento los hubiera forzado a autolimitarse en sus demandas económicas. En este sentido, el sindicalismo peronista no fue, como algunos han argumentado, un movimiento meramente economicista; en él, más bien, los objetivos económicos y políticos se entrelazaron de una manera muy peculiar.

Aunque las demandas impulsadas por los sindicatos peronistas eran de naturaleza económica y corporativa, contuvieron frecuentemente una invocación política. Los sindicatos argumentaron —a veces de un modo directo, otras de manera oblicua—, que las políticas económicas y laborales de los regímenes no peronistas no sólo perjudicaban los intereses inmediatos de los trabajadores, sino que además socavaban la posibilidad del retorno a la época dorada del peronismo. Y, aunque la invocación estuvo dirigida a los trabajadores, fue "oída" también por otras clases: la burguesía argentina también hizo la conexión entre el programa económico y corporativo de los sindicatos peronistas y la posibilidad de resurrección de una era acerca de la cual sus memorias eran enteramente diferentes a las de la clase obrera.

Las prácticas políticas del movimiento sindical combinaron dos elementos: 1) un patrón de esporádicas penetraciones en los mecanismos de representación parlamentaria que se manifestó a través de la limitada, aunque significativa, capacidad de los líderes sindicales para influir sobre la conducta electoral de los trabajadores; y 2) una acción de desgaste a largo plazo —algo así como un continuo e implacable asedio "desde afuera"— que se ejerció contra regímenes políticos que excluyeron al peronismo, al costo de ser altamente vulnerables a ataques cuestionadores de su representatividad y legitimidad.

Las administraciones del periodo 1955-1966, tanto civiles como militares, resultaron debilitadas por los efectos

que produjo uno de sus propios axiomas operativos, es decir, la exclusión del peronismo de la escena política legal. En efecto, tal exclusión redundó en que la capacidad política de la clase obrera para obtener concesiones fue mayor toda vez que ésta se propuso quebrantar las reglas formales. En consecuencia, el movimiento sindical peronista se tornó, tal como se quejaban algunos de sus adversarios, una fuerza subversiva. Tal carácter subversivo, sin embargo, no estuvo asociado a un cuestionamiento de la naturaleza capitalista de las relaciones sociales. Reflejó, en cambio, que el sindicalismo —así como otros actores— recurrió, como último recurso, al quebrantamiento de las reglas formales del sistema. En realidad, el efecto desestabilizador de las acciones emprendidas por el sindicalismo fue siempre indirecto, como resultado del impacto que tales acciones produjeron en la conducta de otros actores, y en particular de las fuerzas armadas. Los sindicalistas contribuyeron a crear circunstancias que indujeron a los militares a deponer a las administraciones civiles, o frustraron los objetivos de los regímenes militares, induciéndolos de ese modo a abandonar el poder para evitar situaciones que, al menos en la percepción de los militares, hubieran requerido como solución la aplicación de medidas de represión masiva.

La estrategia del movimiento sindical peronista tuvo una ventaja importante: su poder se materializó, en buena medida a través de las acciones de otros actores. Esto permitió a los sindicalistas disociarse de las consecuencias indeseables de los ciclos de golpes y repliegues de los militares, como ocurrió reiteradamente entre 1955 y 1966. La estrategia sindical tuvo, además, otras dos características. Por una parte, que el movimiento sindical promoviera el logro de sus objetivos a través de otros actores dio lugar a que los objetivos de estos "intermediarios" interfirieran o modificaran parcialmente los propios del movimiento sindical. Por otra parte, que el poder del sindicalismo se ma-

nifestara principalmente a través de la imposición de restricciones a las acciones de otros actores, ocultó su incapacidad para formular un diagnóstico propio de la crisis estructural que afectaba a la economía argentina desde fines de la década de 1940 y para proponer respuestas.¹³

Finalmente, esta capacidad defensiva permitió al sindicalismo obstaculizar la implementación definitiva de las políticas de estabilización económica que se propusieron retrasar los salarios con respecto a los aumentos de otros precios, e inducir, de ese modo, un aumento de la inversión privada. A partir de 1959, el poder defensivo de los sindicatos fue ejercido con cierta "demora", materializándose sólo después que las políticas de estabilización lograran algunos "éxitos" con respecto a la reducción de los salarios reales y la represión de las demandas obreras.* En consecuencia, la capacidad defensiva del sindicalismo se manifestó principalmente a través de la articulación de "acciones de contraataque". Las mismas tuvieron el efecto de anular, al menos parcialmente, el impacto negativo inicial que los programas de estabilización habían producido en los niveles de salario y empleo. Pero, aún así, la resistencia sindical no pudo revertir algunos de los cambios introducidos en la economía. Durante el período 1959-1961 —al igual que entre 1967 y 1969— se dio una importante expansión de los sectores industriales caracterizados por ser capitales intensivos y contener una presencia predominante del capital extranjero. Luego de la década de rápido crecimiento inaugurada hacia fines de la guerra, el nivel de empleo industrial se estancó hacia mediados de los años cincuenta; a su vez, los aumentos de la productividad de la mano de

* Los que aquí se categorizan como "éxitos" lo fueron con respecto a las políticas de estabilización y no del modelo desarrollado. *Strictu sensu*, el modelo desarrollista no requería retrasos salariales. Estos, más bien, constituyeron requisitos políticos destinados a cimentar la confianza de los sectores dominantes.

obra industrial fueron sustancialmente mayores que los aumentos de los salarios reales. En resumen, el despliegue exitoso de las acciones de contraataque del movimiento sindical impidió la completa ejecución y consolidación de los proyectos de estabilización y crecimiento de fines de la década del cincuenta y principios de los años sesenta, pero no pudo revertir las significativas transformaciones sufridas por la economía argentina a partir de 1959.

LOS MILITARES DEL PERÍODO POSTERIOR A 1955: NUEVOS ESTILOS DE INTERVENCIÓN POLÍTICA

Los militares constituyeron el tercer elemento importante de la fórmula política que emergió a partir de 1955. El éxito de la insurrección militar de ese año inauguró un nuevo patrón de intervención militar en la política argentina. Entre 1930 y 1955, las fuerzas armadas, se habían constituido en guardianes de los gobiernos constitucionales, derrocando tres administraciones civiles. Sin embargo, a excepción del corto período entre 1943 y 1945, los militares se abstuvieron de participar directamente en la conducción del Estado a lo largo de esos veinticinco años. Durante los gobiernos conservadores de los años treinta y principios de la década del 40, así como durante la presidencia de Perón entre 1946 y 1955, no tuvieron una participación significativa en el manejo de los asuntos públicos, más allá de su presencia al frente de algunas empresas del Estado.

Tampoco se propusieron institucionalizar regímenes no democráticos controlados permanentemente por las fuerzas armadas.

A partir de 1955, los militares modificaron gradualmente ese patrón de intervención. Durante una primera etapa, desarrollaron un estilo de intervención tutelar, que resultó en 1) la exclusión del peronismo del proceso electoral y de las instituciones representativas del Estado, y 2) el ejercicio de presiones y de su poder de veto sobre las medidas e

iniciativas políticas del gobierno constitucional instalado en 1958, con el propósito de imponer sus propias preferencias en los asuntos públicos. Por lo tanto, durante el período de intervención tutelar, los militares coartaron las prácticas y principios democráticos de dos maneras. Denegaron el derecho a elegir los candidatos de su preferencia a una porción significativa de la ciudadanía y recurrieron repetidamente a la amenaza de deponer las autoridades constitucionales si las mismas no satisfacían sus demandas. Por supuesto, todo esto se hizo en nombre de la democracia. El peronismo y, luego de 1959, el comunismo fueron equiparados con la "antidemocracia". En consecuencia, las acciones emprendidas contra los peronistas, los comunistas y contra los políticos y funcionarios públicos que supuestamente los respaldaban o simplemente los toleraban, fueron justificadas con el argumento de que tales acciones estaban destinadas a proteger a la democracia de sus enemigos.

A principios de la década de 1960, importantes sectores de las fuerzas armadas comenzaron a darse cuenta de que los beneficios obtenidos mediante la intervención tutelar eran inferiores a los costos ocasionados por ésta. La invocación militar a un respaldo de las organizaciones políticas "democráticas" había forzado a las fuerzas armadas a restringirse a las alternativas políticas que ofrecían los partidos así calificados. Al mismo tiempo, las fuerzas armadas concluyeron que eran percibidas por la opinión pública como responsables de la distorsión de las prácticas democráticas, sin siquiera obtener el beneficio compensatorio de que sus objetivos se cumplieran. Además, el alto grado de compromiso de los militares con el manejo de los asuntos públicos implicó que debieran asumir con frecuencia posiciones específicas con respecto a asuntos de política económica, represión política, legislación laboral y cuestiones semejantes, lo cual, como fue de esperar, contribuyó a generar una profunda fragmentación interna. En ciertas ocasio-

nes tal fragmentación tuvo como origen el apoyo dado por algunos oficiales a la posición de determinados partidos políticos. Más a menudo, el disenso interno y la fragmentación surgieron cuando distintos sectores de las fuerzas armadas no estuvieron de acuerdo en relación a cuestiones tales como el alcance y la naturaleza de las presiones que se ejercerían sobre las autoridades constitucionales, o las políticas que se aplicarían con respecto a los sindicatos y el partido peronista. La fragmentación militar alcanzó su punto más crítico entre los años 1959 y 1963, a raíz de confrontaciones entre facciones opuestas que, en dos ocasiones, culminaron en enfrentamientos armados. La victoria de una de estas facciones militares en 1963 —los “azules”, y la emergencia del general Onganía como indiscutido hombre fuerte del ejército— abrió el camino a una profunda reevaluación de la estrategia política de los militares.¹⁴ En consecuencia, las prácticas de intervención tutelar, que habían prevalecido desde 1955, fueron rápidamente abandonadas, en la medida que se las percibió como responsables de la pérdida de prestigio y unidad de las fuerzas armadas. A partir de 1963, con el advenimiento de los Radicales del Pueblo al poder, los militares suspendieron en buena medida su intromisión en los asuntos de gobierno. Sin embargo, tal como los eventos pronto lo demostrarían, ese cambio no significó que las fuerzas armadas repentinamente hubieran aceptado que debían autoconfinarse al cumplimiento de sus tareas específicas, con estricta subordinación a las autoridades constitucionales. Por el contrario, el interregno “profesionalista” de 1963-1966 —y la paralela reunificación del ejército, y del conjunto de las fuerzas armadas, alrededor de Onganía— precedió e hizo posible la articulación definitiva de la doctrina de la “seguridad nacional”. Uno de los principales corolarios de la doctrina emergente fue que las fuerzas armadas deberían asumir la responsabilidad única en el manejo de los asuntos públicos,

con la consiguiente exclusión de los partidos políticos y la abolición de los comicios y los mecanismos parlamentarios.

En algún momento, hacia la mitad de los años sesenta, Onganía y sus asociados llegaron a la conclusión de que el experimento semidemocrático iniciado en 1955 debía darse por concluido. La combinación que había prevalecido después del derrocamiento de Perón, es decir, un juego parlamentario permanentemente desbordado, pero no enteramente suplantado por las negociaciones y los enfrentamientos extrainstitucionales, tenía, desde el punto de vista de los militares, dos inconvenientes. En primer lugar, como ha sido señalado, creó condiciones que incentivaban la fragmentación militar. En segundo lugar, los militares interpretaron que esa situación inducía a los políticos a no trascender las demandas sectoriales de corto plazo de los diversos sectores sociales, haciendo de este modo imposible el crecimiento económico sostenido. A su vez, se sostuvo, la fragmentación militar y la proliferación irrestricta de conflictos sociales proveían un terreno fértil para la subversión.

El diagnóstico formulado por las facciones militares predominantes en 1966 tuvo profundas resonancias en el conjunto de la sociedad argentina; los grupos liberales, en particular, recibieron con beneplácito la posición antipartidista adoptada por las fuerzas armadas, ya que tales grupos habían llegado a la conclusión de que, en el juego planteado por la política parlamentaria, les tocaba invariablemente elegir entre alternativas igualmente insatisfactorias. Por lo tanto, el golpe militar y la posibilidad de fundar un régimen no-democrático, permanente y estable, apareció ante los liberales como una opción tentadora. La misma no sólo parecía resolver el problema planteado por su endémica carencia de votos, sino también —ellos esperaban— les proveería los medios para dar un golpe final, decisivo, a los sindicatos peronistas que tan exitosamente se habían constituido en uno de los actores políticos centrales del período 1955-1966

Lo que resultó en parte paradójico, sin embargo, en 1966, fue que las consignas de los militares liderados por Onganía fueron acogidas con beneplácito no sólo por los liberales, sino también por el actor a quien, precisamente, los liberales querían liquidar: el sindicalismo peronista y la corriente hegemónica dentro de él, o sea el vanguardismo.¹⁵ El hecho de que tanto los liberales como los sindicalistas aparecieran apoyando el golpe militar de 1966 reflejó dos cosas: la ambigüedad inicial de las propuestas de Onganía en materia de política económica y el atractivo que tuvo para el vanguardismo la posibilidad del establecimiento de un régimen político autoritario. Esta última circunstancia fue una consecuencia de la afinidad de los sindicalistas peronistas con las invocaciones al orden; la unidad, verticalismo, el anticomunismo y la tutela estatal ocuparon un lugar preponderante en la ideología esbozada inicialmente por Onganía y la corriente paternalista organicista de las fuerzas armadas.¹⁶ Si bien las acciones obreras durante la segunda mitad de la década del cincuenta —cuando los peronistas habían restablecido su redefinido predominio dentro de la clase— habían resultado en transgresiones muy serias a aquellas invocaciones, los dirigentes sindicales redescubrieron rápidamente ingredientes de la ideología peronista que resultaban consonantes con los esquemas de militares como Onganía. Dicha consonancia se expresó tanto en las visiones de organización social que inspiraron las estrategias del vanguardismo como en las modalidades de estructuración del movimiento sindical que procuraron implementar. Uno de los principales dirigentes peronistas del período 1957-1966 sugería estas coincidencias de manera muy gráfica:

... el movimiento sindical en los países en vías de desarrollo debe ser verticalista como los cuerpos estructurados —la Iglesia, el ejército, la familia—, pues es la única manera de aunar criterios con el fin de presionar efectivamente y evitar el desorden, que

tanto puede ser provocado por el afán desmedido de lucro de parte de los empresarios como por las demandas incontroladas de los obreros. Además, en la Argentina, un movimiento verticalista recupera la tradición caudillesca. El sindicalismo, asimismo, debe actuar al calor oficial. El Estado debe ser el padre protector así como lo es de la industria, el comercio y el agro.¹⁷

Un acuerdo político con los militares golpistas se convirtió en una tentación cada vez mayor para dirigentes sindicales vinculados a un movimiento político cuya proscripción electoral renovada por los gobiernos semidemocráticos previos a 1966, se estaba transformando en un dato estable de la política argentina. La "intervención de los trabajadores en la orientación del futuro económico del país" que los sindicalistas peronistas venían demandando desde 1957 parecía poder llegar a materializarse sólo si se privilegiaban vías de participación alternativas al semibloqueo carril partidario electoral. La presencia de militares que, por una parte, condenaban el juego partidario *in toto*, y no simplemente al peronismo, y, por la otra, parecían responder a consignas de tono nacionalista, estatista y contra el gran capital fue, entonces, vista por los sindicalistas peronistas como el posible agente catalizador de un régimen político no parlamentario que sirviese para cimentar la alianza entre fuerzas armadas y sindicatos que, supuestamente, se había frustrado en 1955.

NOTAS

¹ Como el autor ha sugerido en otro trabajo, "la ecuación socioeconómica del peronismo no fue demasiado compleja. Por una parte, se impuso un techo a las ganancias de la clase terrateniente de la pampa húmeda, principalmente a través de las tasas cambiarias múltiples. Por otra parte, se promovió un aumento simultáneo de los salarios reales y de las ganancias del sector industrial, incluyendo a los segmentos intensivos en mano de obra y que utilizaban técnicas más eficientes. Este aumen-

to de las ganancias del sector industrial se basó principalmente en la expansión del consumo de los bienes salario" (Cf. Cavarozzi, 1982)

⁴ En realidad el reformismo populista no-peronista llevó el esquema de reconciliación de clases aún más lejos que el mismo peronismo. La clase terrateniente pampeana había sido expropiada de una importante porción de sus ganancias, para que la redistribución del ingreso y la sustitución de importaciones, que tuvieron lugar entre 1945 y 1955, fueran posibles. Por lo tanto, era poco claro cómo se haría para restaurar los incentivos económicos a los terratenientes, sin afectar los intereses de las clases urbanas —ya fueran la burguesía, el proletariado, o ambos.

⁵ El partido radical había alcanzado el poder en 1916, después de haber luchado por la implantación del sufragio masculino universal. Luego del derrocamiento de su líder, Hipólito Yrigoyen, los radicales fueron proscriptos de las elecciones presidenciales hasta mediados de los años cuarenta. A partir de entonces, el partido radical adoptó una plataforma económica relativamente progresista, mientras; al mismo tiempo, atrajo a la oposición antiperonista, de carácter más bien conservador.

⁶ A partir de fines de la década de 1950, miembros de las fuerzas armadas también comenzaron a prestar apoyo a la postura desarrollista.

⁷ Como resultado de medidas y/o presiones impuestas por los militares, el peronismo estuvo proscripto desde 1955 en adelante. Esto sometió a los partidos políticos a una doble presión. Hacia fines de la década de 1920, el sistema político argentino había alcanzado niveles de participación electoral comparables a los de los países capitalistas más avanzados. Además, durante el régimen peronista, la clase trabajadora había alcanzado la ciudadanía plena, y el gobierno había extendido a las mujeres el derecho a votar. Por lo tanto, la realidad política argentina de mediados de la década de 1950, condenó como invariables los intentos de los "demócratas" que pretendían establecer la "democracia" únicamente para los "demócratas", excluyendo de hecho a una porción de la ciudadanía que constituía entre un treinta y un cincuenta por ciento de la misma. Aun los partidos que continuaron articulando una ideología antiperonista, como los radicales del pueblo, y varios grupos conservadores más reducidos, comenzaron a cuestionar las regulaciones proscriptivas que minaban los fundamentos de la postura democrática, según la cual, el respeto de la soberanía popular constituía la principal base de legitimación del sistema. Más aún, otras corrientes políticas, como los radicales intransigentes, y pequeñas fracciones de los partidos conservador, socialista y demócrata cristiano, explícitamente buscaron atraer los votos peronistas, a cambio de promesas referidas a la implementación de determinadas políticas sustantivas y al levantamiento de la proscripción del peronismo en las "próximas" elecciones. En la esfera de la legislación laboral y de las políticas gubernamentales con respecto al movimiento sindical, la oposición de los partidos no-peronistas a los lemas de los líderes sindicales del peronismo se fue debilitando gradualmente. En particular, los partidos relajaron sus posiciones contrarias a

las demandas peronistas referidas tanto al restablecimiento de "una única CGT y un solo sindicato por rama de actividad", como al sistema de negociación colectiva de salarios, con la participación del Estado. En definitiva, el consenso inicial logrado en torno a la proscripción y exclusión del peronismo se disolvió gradualmente.

⁸ Actuando desde el interior del régimen militar, los radicales del pueblo respaldaron en 1956, los programas redistribucionistas del ministro de Economía Eugenio Blanco, y en 1957 bloquearon parcialmente la implementación del plan de estabilización relativamente ortodoxo, impulsado por el sucesor de Blanco, Roberto Verrier.

⁹ Como ha sido discutido en otro lugar por el autor —y señalado por diversos estudiosos del tema—, los partidos conservadores de la Argentina nunca se recompusieron luego del colapso del régimen oligárquico en 1916. Esto constituyó prácticamente un caso único en el contexto del Cono Sur latinoamericano; en otros lugares como Brasil, Chile, y Uruguay, el conservadurismo político siguió constituyendo una fuerza electoral significativa. (Cf. Cavarozzi, 1978.)

¹⁰ En 1959, Frondizi —amenazado por repetidos "planteos" militares— designó a Alsogaray, un liberal, como ministro de Economía. En 1961, lo desplazó de su cargo, cuando el plan de estabilización había logrado ya algunos de sus objetivos —fundamentalmente, la reducción de la inflación y del déficit de la balanza de pagos—.

¹¹ Para un análisis detallado de las similitudes entre las políticas y plataformas económicas del peronismo y el Radicalismo del Pueblo, cf. Canitrot, 1975.

¹² En realidad, podría afirmarse que el ingenuo intento de erradicar el peronismo, llevado a cabo por el régimen militar de 1955-1958, provocó una reacción antagónica que tuvo la virtud de reforzar la lealtad de la clase obrera y otros sectores populares con respecto al peronismo. (Cf. Cavarozzi, 1979.)

¹³ Desde principios de los años cincuenta, se fue tornando crecientemente evidente que la fórmula económica vigente desde la Segunda Guerra Mundial no podía mantener por mucho tiempo los niveles de salarios y empleo, siendo necesario, en consecuencia, que se produjeran profundas alteraciones de la estructura económica.

¹⁴ Tradicionalmente, el ejército ha sido el arma más poderosa, y el hecho de que la armada se aliara, precisamente, con el sector que sería derrotado en los enfrentamientos de 1962-1963 —es decir, los "colorados"— consolidó aún más el rol dominante del ejército.

¹⁵ Cf. Cavarozzi, 1979:2; págs. 59-65.

¹⁶ Para un análisis de las corrientes internas de las fuerzas armadas durante el gobierno instalado en 1966, cf. O'Donnell; 1982.

¹⁷ Cf. Cavarozzi, 1979; pág. 62.

